

Construyendo verdad, haciendo memoria



Colombia adentro:
capítulo territorial Chocó

4



Construyendo verdad, haciendo memoria



Cartillas pedagógicas sobre el Informe
Final de la Comisión de la Verdad



**Colombia adentro:
capítulo territorial Chocó**

Construyendo verdad, haciendo memoria.

Cartillas pedagógicas sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Cartilla 4: Colombia adentro: capítulo territorial Chocó

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP)

Directora general

Martha Lucía Márquez Restrepo

Subdirector de programas

Juan Pablo Guerrero Home

Coordinación del Programa Conflicto, Estado y Paz

Víctor Barrera

Coordinador de la Línea Justicia Transicional Étnica

Juan Pablo Guerrero Home

Textos

Silvia Corredor Rodríguez

Edición

Laura Catalina Tovar Bohórquez y Sonia Cristina Vargas Perdomo

Líder de Comunicaciones e Incidencia

Diana Patricia Santana Jiménez

Coordinación editorial

Edwin Parada Rodríguez

Corrección de estilo

Lorena Vides Galiano

Diseño e ilustración

Silvia Trujillo Jaramillo

Impresión

Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S.



Cinep/Programa por la Paz

Carrera 5 n.º 33B-02

PBX: (+57 1) 245 6181

Bogotá, D.C., Colombia

www.cinep.org.co

Primera edición, febrero de 2025

ISBN: 978-958-644-379-1

Bogotá, D.C., Colombia

Impreso en Colombia / *Printed in Colombia*

El contenido de este libro cuenta con una licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0”.

-  [CinepProgramaporlaPaz](https://www.facebook.com/CinepProgramaporlaPaz)
-  [Cinep_ppp](https://www.instagram.com/Cinep_ppp)
-  [Cinep_ppp](https://twitter.com/Cinep_ppp)
-  [Cinepppp](https://www.youtube.com/Cinepppp)
-  Cinep/Programa por la Paz
-  [@cinep_ppp](https://www.tiktok.com/@cinep_ppp)





Contenido

Introducción.....	4
¡Somos pacífico!	
Una comunidad en medio del agua.....	9
Hitos del conflicto armado.....	16
Los anhelos de paz y la persistencia de la violencia.....	50



Introducción



Querido lector y lectora:

En sus manos tiene un documento corto, pero con información importante sobre lo que usted debe saber del Informe Final de la Comisión de la Verdad. El 26 de junio del 2022 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, le entregó al país diez tomos¹ que conforman el Informe Final y un portal web, llamado *Hay futuro si hay verdad*, con toda la investigación que realizaron en cinco años.

La Comisión de la Verdad se creó en 2017, unos meses después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016. Desde entonces, los equipos liderados

1 Los nombres de los tomos son: Hallazgos y recomendaciones, *No matarás, Colombia adentro* (contiene 14 libros de once regiones del país, un ensayo introductorio, uno sobre las dinámicas urbanas de la guerra y otro sobre el campesinado y la guerra), *Hasta la guerra tiene límites*, *Mi cuerpo es la verdad*, *Sufrir la guerra y rehacer la vida*, *Resistir no es aguantar*, *La Colombia fuera de Colombia*, *No es un mal menor* y *Cuando los pájaros no cantaban*, los cuales se pueden revisar en www.comisiondelaverdad.co

por 12 comisionados de la verdad² realizaron más de 15 mil entrevistas individuales y colectivas a más de 30 mil personas en Colombia y 24 países, y recibieron cerca de 730 casos y 1195 informes, que actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación en Bogotá para consultar. Como si fueran colchas de retazos, se armó un rompecabezas a muchas manos de cómo fue la guerra en Colombia, poniendo como punto de partida el periodo de violencia bipartidista entre los años 1944 y 1958 y, como punto de cierre, el periodo de posacuerdo entre 2016 y 2020.

Esto es importante porque escribir y difundir lo que ha pasado en Colombia, nos permite como sociedad determinar qué ha dejado la guerra, qué hemos aprendido y qué medidas deberíamos acatar para que algo de tal magnitud no se repita. Y ese es precisamente el objetivo de esta cartilla que tiene usted en sus manos, querida lectora y lector, que usted pueda acceder a la información que contiene el Informe Final para poder comprender la labor de la Comisión de la Verdad, pero sobre todo para que todos y todas sepamos qué ha pasado en el país y en nuestras regiones y podamos compartir aprendizajes y experiencias para actuar en el nuevo contexto de conflicto que se vive en los distintos territorios.

En un esfuerzo para que la población étnica del Chocó y el campesinado del Urabá conozca el Informe Final, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP) creó seis cartillas resumen de los tomos: 1) *Hallazgos y recomendaciones*; 2) *Resistir no es aguantar*, sobre las violencias y daños contra los pueblos étnicos; 3) capítulo territorial del Bajo Atrato y Urabá; 4) capítulo territorial del Chocó; 5) *Mi cuerpo es la verdad*, que reconoce las afectaciones de la guerra a las mujeres y población LGBTIQ+,

2 Sus nombres son: Alejandro Valencia, Lucía González, Leyner Palacios, Alejandra Miller, Patricia Tobón, Alejandro Castillejo, el mayor Carlos Ospina, Saúl Franco, Carlos Beristain, Marta Ruiz y los fallecidos Ángela Salazar y Alfredo Molano.

y 6) *No es un mal menor*, sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto.

Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la cuarta cartilla sobre el capítulo territorial del Pacífico, uno de los 14 libros que componen el tomo territorial del Informe Final llamado *Colombia Adentro*, que en 240 páginas expone las dinámicas locales del conflicto armado en esta región. Esta cartilla también se construyó con el libro *El campesinado y la guerra* —de esta misma colección— un documento de 192 páginas que recoge los relatos, afectaciones e impactos de la guerra al campesinado, reconocido como la principal víctima del conflicto.

Estos libros son centrales para entender que las dinámicas e impactos diferenciados del conflicto armado están estrechamente relacionados con elementos territoriales y geográficos de cada región. Desde casi 1800 voces, perspectivas y experiencias³ de las personas de esta región entrevistadas por la Comisión de la Verdad y los análisis del equipo investigador, se construyó esta cartilla que tiene en sus manos.

Estas acciones dirigidas al Chocó y al Urabá responden a la presencia y trabajo por más de 20 años de Cinep/PPP en este territorio con las organizaciones étnicas y campesinas, desde la línea de Justicia Transicional Étnica. Como parte del fortalecimiento organizacional y la búsqueda de reparación, Cinep/PPP le entrega estas cartillas a usted, querido lector y lectora, para que sean insumos de sus procesos sociales. Además, se suma a las actividades que más de 3400 entidades realizan como parte del legado de la Comisión de la Verdad para que

3 La Comisión de la Verdad acompañó procesos de reconocimiento de responsabilidades con firmantes del Acuerdo Final de Paz en la región, puntualmente uno realizado en el Carmen de Atrato (Chocó). ¿Cómo funcionan esos espacios? Son diálogos privados y públicos entre víctimas y responsables de los daños causados en la guerra en ese lugar particular.

conozcamos lo que le ha pasado al país y así podamos construir un futuro donde reine la convivencia, la paz y haya seguridad de que no habrá repetición.

Le invitamos a hacer este recorrido por seis capítulos del Informe Final de la Comisión de la Verdad para estar bien informado y contar con herramientas para la construcción de memoria, verdad y no repetición en cada uno de sus territorios.

Bienvenido y bienvenida a la cuarta parada.

¡Buen viaje!



Glosario

Antes de iniciar, queremos compartir con usted un pequeño glosario de las palabras claves —definidas por la Comisión de la Verdad— que debe tener presente:

Baldío: es un terreno rural que hace parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales del país y no ha tenido un dueño particular. Puede ser entregado a personas naturales, empresas comunitarias o a quien determine la ley.



Despojo: afectación territorial que, en el marco del conflicto armado interno, se da a una apropiación total o parcial del territorio, de sus recursos naturales y culturales, a través de medios ilegales.

Territorio: espacio físico y cultural con trasfondo histórico que garantiza la vida y pervivencia de las comunidades y los pueblos étnicos.



Con estos elementos, podrá navegar con claridad por este recorrido histórico, así como cuando se embarca en noches de lucha llena. Encontrará el texto dividido por frases populares que dan cuenta que la historia de este país está creada a partir de experiencias y discursos de sus pobladores.

¡Somos pacífico!

Una comunidad en medio del agua



La región del Pacífico se encuentra al occidente del país, agrupando los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente los municipios que están más cerca al océano Pacífico. La Comisión de la Verdad afirmó que para entender a esta región hay que hacerlo desde la mirada de las poblaciones étnicas⁴ que allí habitan, sus relaciones con el territorio y las conexiones que tienen con otras regiones del país.

Aunque la región del Pacífico está compuesta por cuatro departamentos, estos se conectan al norte, por el Chocó, con la región de Antioquia, principalmente con el Urabá (ver mapa de la cartilla tres), y hacia el sur con el departamento de Risaralda y el norte del Valle. En el caso de las dinámicas del Pacífico valluno y caucano, la Comisión de la Verdad resaltó que tienen más relación con lo que pasa en el sur del Valle y el norte del Cauca. ¿Qué pasa con el Pacífico en Nariño? Imagínese que esta es una de las regiones más complicadas por todo el movimiento de la coca que viene desde Caquetá y Putumayo.

¿Usted sabía que la región del Pacífico tiene tres subregiones? Aquí le contamos cuáles son:

4 En la cartilla dos, le contamos lo que encontró la Comisión de la Verdad sobre las afectaciones, impactos y resistencias de las poblaciones étnicas del país durante el conflicto armado, especialmente, las indígenas, afrocolombianas y negras ubicadas en Chocó y el Urabá antioqueño.

A stylized map of the Pacific coast of Colombia. The land is shown in light gray, and the ocean in light blue with wavy lines. Three regions are highlighted with numbers 1, 2, and 3. Arrows point from the text descriptions to the corresponding regions on the map. Region 1 is the northern part of the coast, Region 2 is the middle part, and Region 3 is the southern part. The text 'Océano Pacífico' is written in the bottom right corner of the map area.

1.

Pacífico norte: comprende casi todos los municipios del Chocó, sin contar el litoral del San Juan. Tiene una estrecha relación con el Urabá y el Occidente Antioqueño.

2.

Pacífico medio: aquí entran San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) y los municipios de la costa pacífica caucana que son López de Micay, Guapi y Timbiquí.

3.

Pacífico sur: comprende todos los municipios de Nariño que dan al mar, siendo el más importante Tumaco.

Fuente: elaboración propia
con base en el DANE (2021)
y la Comisión de la Verdad (2022).

Océano
Pacífico



En total son 44 municipios de los cuatro departamentos que se ubican en toda la región del Pacífico. La Comisión de la Verdad documentó que el 5.26 % de la población indígena del país habita en 172 resguardos indígenas y, en el caso de los afrocolombianos, son el 19.93 % en 166 territorios colectivos de comunidades negras. Las historias de estos pueblos están estrechamente ligadas con sus territorios. Así lo narró la Comisión en el caso de dos pueblos indígenas que habitan el Chocó:

Remando contra el olvido

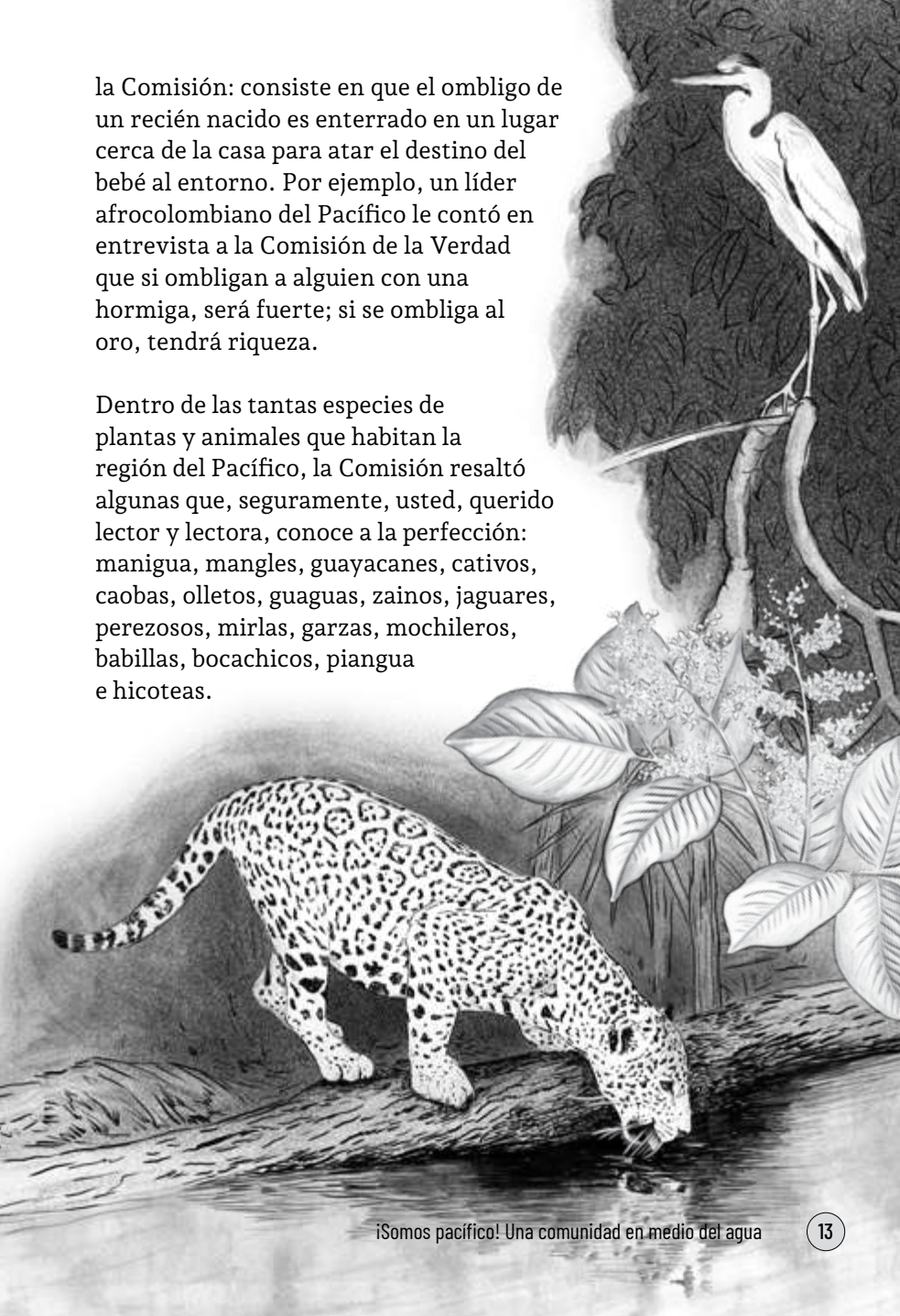


La Comisión de la Verdad recopiló que los embera son “gente labrada o salida del árbol”, tallados por su creador desde el corazón del *okendo*, una fina madera de las selvas chocoanas que encontró su hábitat en el agua. En el caso de los wounaan, son nacidos de las manos de Maach Aai, su creador, en las tierras negras de la playa grande del río Sábalo en la cuenca del Baudó y, según cuentan los abuelos gunadule, la historia de los pueblos está escrita sobre el rostro de la arena.

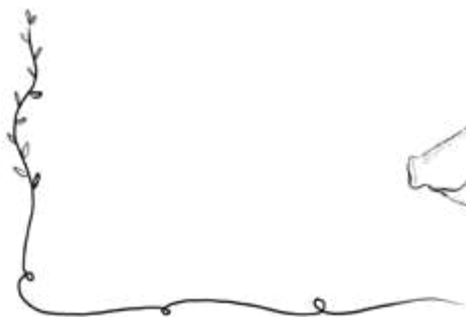
Una de las expresiones que dan cuenta de la conexión de los pueblos étnicos del Pacífico con su territorio son las “ombligadas”. Seguramente ha escuchado hablar de eso, ¿verdad? Para quienes no tengan muy claro el asunto, funciona así, según documentó

la Comisión: consiste en que el ombligo de un recién nacido es enterrado en un lugar cerca de la casa para atar el destino del bebé al entorno. Por ejemplo, un líder afrocolombiano del Pacífico le contó en entrevista a la Comisión de la Verdad que si ombligan a alguien con una hormiga, será fuerte; si se ombliga al oro, tendrá riqueza.

Dentro de las tantas especies de plantas y animales que habitan la región del Pacífico, la Comisión resaltó algunas que, seguramente, usted, querido lector y lectora, conoce a la perfección: manigua, mangles, guayacanes, cativos, caobas, olletos, guaguas, zainos, jaguares, perezosos, mirlas, garzas, mochileros, babillas, bocachicos, piangua e hicoteas.



¿Las nuevas generaciones identifican estas especies? ¿Qué otros animales o plantas hacen falta?



En medio de tanta riqueza de animales y árboles, el Pacífico colombiano es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta, título que también ha generado la incursión histórica de empresas extractivas para explotar recursos naturales.

La Comisión de la Verdad documentó que para 1959 en Chocó ya existían 22 aserríos activos, de los cuales, 8 estaban ubicados en el Bajo Atrato. A finales del siglo XIX, tras la industria maderera, la extracción de oro y platino se introdujeron en la región, generando que los ríos, además de ser arterias de comunicación entre las comunidades, fueran vías para comercializar los recursos que se extraen de esas tierras, y por donde también transitaban los grupos armados ilegales y, tras ellos, la violencia.

Todas estas conexiones por tierra y agua llevaron a que las montañas y ríos de la región Pacífico, como afirmó la Comisión de la Verdad (2022), “se transformaron para siempre con la llegada y el desarrollo de la guerra” (p. 33). Para esta cartilla, nos enfocaremos principalmente en lo que sucedió en el departamento del Chocó y sus conexiones.

En este capítulo territorial, la Comisión de la Verdad recapituló una serie de hitos que marcaron el conflicto armado en Pacífico. Seguramente usted ya los conoce y los ha vivido en carne propia, o quizás no. En este ejercicio de memoria, retomamos los relatos y análisis sobre las luchas, violencias, resistencias y esperanzas de los pueblos indígenas y comunidades negras, las cuales — muchas — hoy por hoy persisten en el territorio para remar contra el olvido y entender el presente.

Lo invitamos, querido lector y lectora, a complementar este relato con recuerdos y anécdotas junto a las nuevas generaciones, pues estas cartillas funcionan también como material de consulta, memoria y trabajo colectivo para sus procesos sociales.

Hitos del conflicto armado

Los elementos geográficos, históricos, sociales y culturales de la región Pacífico, donde confluyen pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, comunidades campesinas, mestizos y una estrecha relación con otros departamentos como Antioquia y Risaralda —sumado a la gran biodiversidad— encendió los focos de interés sobre la región. Grupos armados legales e ilegales, junto a empresas de extracción de recursos naturales y minerales⁵, llegaron al Pacífico, desarrollando actos de violencia contra el territorio y quienes lo habitan.

Haremos un viaje histórico desde 1958 para entender lo que la Comisión de la Verdad encontró sobre la violencia que se vivió en el Pacífico, por qué las guerrillas y los paramilitares llegaron a la región y las violaciones a los derechos humanos que actores legales e ilegales perpetraron contra la población civil.

Encontrará el texto dividido por frases populares que dan cuenta cómo la historia de este país es creada, también, a partir de experiencias y discursos de sus pobladores. Con estos elementos, podrá navegar con claridad por este recorrido histórico, así como cuando se embarca en noches de luna llena.

5 La Comisión de la Verdad documentó que el 40 % de los municipios con las cifras más altas de presencia de minería de aluvión están en el Chocó. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó que, desde los 2000, la maquinaria entró por el San Juan y el Atrato en Chocó y se extendió por todo el Pacífico, especialmente, por los consejos comunitarios.

Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contá...

Para comenzar con esta historia es necesario devolvemos a abril de 1948 cuando la población tumaqueña comenzó a desplazarse y, años después, durante el gobierno del General Rojas Pinilla (1953-1957), se declaró al río Mira, en la frontera de Nariño con Ecuador, como zona de colonización. ¿Por qué este dato es importante? Imagínese que esta decisión propició la transformación de cinco mil hectáreas de bosques en pastos para la ganadería, cultivos de banano y plantaciones de palma aceitera. Esta situación generó apertura y atrajo inversionistas nacionales y extranjeros con negocios en Cali y Bogotá.

Durante la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), se enfatizó en la explotación forestal como motor de desarrollo para Tumaco y, antes de finalizar su gobierno, en 1960, se introdujo la palma africana a través del Instituto de Fomento Algodonero. ¿Usted sabía que un extranjero japonés comenzó a transformar el paisaje nativo con monocultivos? Le cuento: se llama Matakoshi Kondo y la Comisión de la Verdad encontró que el gobierno de la época le tituló 200 hectáreas donde sembró pasto, palma y banano.



Hasta 1959, los bosques del Pacífico colombiano eran áreas de uso común, pero la Ley 2 de 1959 delimitó siete reservas forestales que sumadas componen la Reserva Forestal del Pacífico. Esta ley buscaba conservar los bosques y garantizar su explotación. Querido lector y lectora, ¿conocía usted que existía esta reserva forestal y que son más de 11 millones de hectáreas? ¡Es casi el 12 % del territorio nacional! Sin embargo, la nueva normativa⁶ autorizó al Estado emitir permisos de aprovechamiento forestal y controlar las rentas generadas por la explotación de los recursos forestales.



En la década de 1960, en el proceso de colonización dirigido por el Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), los campesinos que buscaban tierras en el Urabá y el Darién fueron atraídos por la idea de que en estas regiones “corría leche y miel”. Para 1961 se amplió la frontera agrícola en la región del Pacífico, sustrayendo una cuarta parte de la superficie originalmente designada como reserva. Esto generó una nueva

6 La Ley 135 de 1961 amplió la frontera agrícola en regiones como el Pacífico.

ola de colonización, dirigida por el INCORA, que desconoció las territorialidades ancestrales de los pueblos étnicos⁷.

Un anuncio en el periódico El Tiempo en noviembre de 1963 promovió la colonización de Balboa, en el Valle del Tanela, municipio de Acandí, atrayendo iniciativas agrícolas y ganaderas en tierras consideradas baldías⁸, aunque en la práctica eran habitadas por población negra e indígena, desde hace varios siglos atrás. ¿Qué cree que pasó? Pues imagínese que campesinos sinuanos y antioqueños se establecieron como peones en fincas ganaderas recién establecidas y también desempeñaron roles como productores agrícolas y ganaderos de pequeña y mediana escala. En los municipios del Bajo Atrato, específicamente, la Comisión de la Verdad encontró que muchos afrodescendientes vendieron sus tierras bajo presiones de empresas palmeras, utilizando engaños para la adquisición de terrenos. Querido lector y lectora, ¿cómo recuerda usted esa época o qué le han contado?

Durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), mediante el Acuerdo 18 del 16 de octubre de 1972, se autorizó la sustracción de 16 700 hectáreas de la reserva forestal para constituir una reserva indígena entre los ríos Juradó y Amparadó en Chocó. Aunque, como siempre en la historia de este país, nos queda faltando un centavo para el peso, hubo un vacío y es que gran parte del territorio ancestral quedó fuera del área delimitada. Es decir, se podía seguir explotando las especies nativas del bosque. Esta situación generó, según la Comisión de la Verdad, despojos territoriales que causaron graves impactos culturales a los indígenas embera katío del norte del Chocó.

7 Como la rotación de cultivos, su relacionamiento con el territorio y las nociones de propiedad de las comunidades.

8 Es un terreno rural que hace parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales del país y no ha tenido un dueño particular. Puede ser entregado a personas naturales, empresas comunitarias o a quien determine la ley.

Remando el olvido contra



La Comisión de la Verdad documentó que, para esos años, se constituyeron más reservas indígenas del pueblo Embera Katío al norte del Chocó, especialmente en el municipio de Unguía para proteger estos territorios de los procesos de colonización de las zonas vecinas. Las reservas fueron: Arquía (1971), Cutí (1973) y Tanela (1975).



Toda la subregión sufriría por la invasión de aserradores en busca de madera fina a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta. En consecuencia, las tensiones por el acceso y control sobre el territorio en el Bajo Atrato eran evidentes en la década de 1970. Desalojos liderados por el Estado, principalmente del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), afectaron a 750 familias mestizas, negras e

indígenas, debido a la delimitación del Parque Nacional Natural Los Katíos en las inmediaciones del río Cacarica en 1973.

¿Conocía usted este suceso?
¿Sus padres o abuelos se vieron afectados?



Se rumoreaba que estos desalojos no solo estaban relacionados con la creación del parque, sino también con el interés de controlar la zona para la futura construcción de un canal interoceánico que conectaría el Pacífico y el Atlántico, atravesando la selva norte del Darién. De este periodo, un líder indígena recuerda con amargura lo siguiente:

Me acuerdo tanto que había un ave grande que le llamaban Pajuí, que es como un Chumbo. Y el Pajuí tiene la virtud de poner el pico en el suelo y darse cuenta quién viene, a distancia, entonces por eso es tan difícil cazarlo. ¿Y ahora? Ya esta generación ni conoce el Pajuí... La empresa pagaba para que tumbaran. (Comisión de la Verdad, 2022, p. 57)



La colonización también se vio impulsada por la presencia del Partido Comunista Colombiano (PCC) en el Urabá desde 1958. Los sindicatos de tendencia comunista y maoísta, como el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintrabanano) y el Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintagro), formaron políticamente a las Juntas de Acción Comunal en las nuevas comunidades de colonos para impulsar acciones por la defensa de los intereses del campesinado y de los trabajadores bananeros. Se organizaron encuentros y festivales para socializar la agenda agraria del partido, lo que resultó en un aumento significativo de simpatizantes a partir de 1974.

Ya no queda nada, solo escombros...

Para el año de 1971, las FARC-EP llegaron a San José de Apartadó bajo el mando de Alberto Martínez, por orden de la Cuarta Conferencia. Este grupo sirvió como base para la creación del Frente 5, buscando establecerse como actores preponderantes en las dinámicas económicas y sociales de la región. Las FARC-EP adoptaron el papel de agentes del orden en la expansión de la agroindustria, utilizando la fuerza cuando lo consideraban necesario. La Comisión de la Verdad halló que, para la época, esta guerrilla estableció una clara diferenciación entre “el pueblo” y “los enemigos de clase”, exigiendo mejoras en las condiciones de los trabajadores bananeros y solicitando contribuciones económicas a ganaderos a cambio de servicios de seguridad.

Este mismo Frente se consolidó en la región a raíz de las tensiones generadas por conflictos agrarios no resueltos en torno a la tenencia de la tierra. Asimismo, respaldaron la colonización presentándose como aliados de los intereses campesinos. Para contrarrestar el crecimiento exponencial del Frente 5, en 1975 el Ejército creó el Batallón Voltígeros⁹ que, según encontró la Comisión de la Verdad, recorría los pueblos de Acandí difundiendo consignas contra el Partido Comunista y amenazando a sus militantes, así como intimidando a indígenas embera y comunidades negras, a solicitud de ganaderos que se apropiaban de territorios ancestrales. La persecución del campesinado y otros sectores estaba motivada por la doctrina del “enemigo interno”¹⁰, que veía al comunismo como una amenaza para la nación. Esta violencia resultó en los primeros desplazamientos. Posteriormente, en la región también se

9 Se ubicó inicialmente en Chigorodó y luego en Carepa.

10 La Comisión de la Verdad señala que es una doctrina política contrainsurgente que se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos.

ubicaron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19).

A la par, empresas de extracción de madera continuaron destruyendo el bosque del Pacífico. En el caso del Chocó, la Comisión halló que para 1976 ya habían sido entregadas miles de hectáreas, a través de títulos privados, en zonas cercanas a Acandí y Riosucio, municipios ubicados en la subregión del Bajo Atrato, a orillas del río Atrato. ¿Usted sabía que entre los años 70 y 80, el Estado adjudicó a grandes compañías madereras cerca de 800 000 hectáreas en bosques del Bajo Atrato?

Además, la Comisión de la Verdad encontró que en el San Juan, la *Chocó Pacífico Mining Company* dejó un legado de contaminación ambiental y segregación socio-racial luego de 60 años de extracción de platino en la zona que finalizó en 1974. La empresa tuvo sede en Andagoya, municipio de Sipí, a orillas de los ríos Condoto y San Juan. Según encontró la Comisión de la Verdad, la empresa dejaba que los trabajadores negros estuvieran en Andagoya solo para ejercer las labores de la empresa — más no para vivir — y, en consecuencia, fueron confinados en la otra orilla del río, conocida como Andagoyita. Aún existe esa división por el río, si usted es de este lugar, ¿cómo se manejan las cosas entre los habitantes de cada lado del río y de qué manera esa historia ha afectado ese relacionamiento, apreciado lector y lectora?

Entre 1975 y 1991, los registros muestran que Fuerzas Militares y grupos de autodefensa fueron responsables de homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el Darién chocoano. Sin embargo, las FARC-EP también llegó a la zona a combatir el control territorial — que a su vez afectó a la población civil —, pues había interés en el paso fronterizo con Panamá. El Frente 5 de esta guerrilla buscó expandir su base social,

prometiendo mejorar las condiciones de vida de comunidades históricamente olvidadas por el Estado, capitalizando de esta manera demandas sociales, como la falta de acceso a servicios de salud, para consolidarse en la región.

La Comisión de la Verdad encontró que, para crecer, el Frente 5 tuvo que reforzar su presencia y trabajo político en las comunidades del Bajo Atrato y el Darién, basándose en el trabajo realizado por el Partido Comunista. La vinculación de campesinos a los movimientos de izquierda, que en varias ocasiones lo hacían como método para proteger su vida debido a los ataques recibidos por parte de las Fuerzas Militares y grupos de autodefensa, significó una ruptura con sus familias y una inmersión en la lógica de confrontación entre enemigos. Esto hizo que la presencia de las FARC-EP y su respaldo armado a las reivindicaciones campesinas intensificaran el ambiente propicio para la estigmatización y la sospecha como norma de supervivencia.

Son estrellas diferentes.

En la década de los 80, Pablo Escobar y Carlos Ledher¹¹ operaban dos laboratorios de procesamiento de cocaína en las cuencas de Cacarica y Domingodó. Por otro lado, Francisco Iván Cifuentes Villa¹², conocido como Pacho Cifuentes, construyó centros de recreación y diversas empresas fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, en Cabo Marzo, Juradó, Mutis y Bahía Solano, en la costa pacífica chocoana. Los dueños de aserríos asociados con los narcotraficantes también lavaban dinero a través

11 Exnarcotraficante colombo alemán, señalado de ser uno de los creadores del Cartel de Medellín.

12 Fue piloto de Pablo Escobar y fundador de la organización de tráfico de drogas Los Cifuentes conocida como “el Cartel de los Pilotos”.

de la tala de maderas, sembraban pastos, expandían la ganadería, constituían pesqueras fachadas e impulsaban la construcción de pistas de aterrizaje en comunidades como Dos Bocas y Santa Marta de Curiche, territorios del pueblo indígena Wounaan.

¿Le suena familiar el nombre “Alfamar”? Imagínese que fue presentada como una empresa pionera en la industria agrícola, pero resultó siendo una fachada de pistas de aterrizaje construidas para transportar drogas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. La compra de tierras, la construcción de balnearios y el crecimiento de locales comerciales en municipios como Juradó y otras zonas del litoral estaban vinculados al testaferro de las mafias, que movían libremente avionetas cargadas de droga a cambio de sobornos.

La Comisión afirma que los indígenas de la zona, inicialmente afectados por la explotación forestal no regulada por el Estado, ahora enfrentaban la presencia de narcotraficantes armados y colonos que ejercían mayor presión sobre sus territorios ancestrales. Las solicitudes de las comunidades indígenas para sanear el territorio y respetar su autonomía no eran atendidas, y los jóvenes locales se veían obligados a servir como mulas para transportar droga y armamento entre Panamá y Riosucio debido a la falta de oportunidades.

¿En qué momento el Pacífico colombiano se convirtió en una zona estratégica para las mafias? La Comisión de la Verdad estima que fue desde la bonanza marimbera de finales de los setenta y principios de los ochenta, mucho antes de la llegada de la cocaína. Debido a que en el Caribe se dio una amplia persecución a las plantaciones de marihuana, el Bajo Atrato, el Darién y Juradó se convirtieron en los principales nichos de producción. Así, las mafias aprovecharon la oportunidad para trasladar los cultivos a la región fronteriza con Panamá.

La bonanza de la marimba atrajo a los Cárdenas y los Valdeblánquez —dos familias que manejaban los cultivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira y la Serranía del Perijá—, quienes se hicieron pasar por empresarios ganaderos para comprar tierras y regalar semillas a los campesinos. La marihuana, conocida como “marimba” en la zona, se volvió más rentable que otros cultivos. La bonanza marimbera motivó una segunda oleada de colonización espontánea, contribuyendo a la formación de comunidades mestizas en cuencas como la del río Cacarica. Aunque la bonanza pasó rápidamente, abrió la puerta a foráneos interesados en las rutas estratégicas que conectan el océano Pacífico con el mar Caribe. Al mismo tiempo, cambió la vocación de los ríos y caminos, convirtiéndolos en corredores estratégicos para el transporte y la comercialización de la hoja de marihuana. Querido lector y lectora, ¿cómo recuerda usted esta bonanza marimbera y esta época?

En la región Pacífico, los cultivos de marihuana y coca alteraron la movilidad por los ríos, convirtiendo las cuencas en corredores estratégicos. Por ejemplo, la cuenca del río Naya se convirtió en el epicentro del comercio de hojas de coca y marihuana, con locales subiendo remesas que intercambiaban por estas sustancias y las llevaban a Buenaventura para su exportación. Le cuento que también la Comisión encontró que en los años ochenta, la variedad de coca conocida como “pajarita” se introdujo en la región y se establecieron los primeros laboratorios para procesar bazuco cerca de las zonas de producción de materia prima.



Toda la movilidad de droga y armas por la región Pacífico se entretejió con una serie de asesinatos y persecución a líderes y militantes políticos. Por ejemplo, de la Unión Patriótica (UP), el 11 de enero de 1985 fueron asesinados 7 militantes en Acandí¹³, causando rupturas entre las familias, mayor confrontación en la zona y aumento en la estigmatización hacia la población.

"Nos relacionaban a los indígenas como gente mala de la izquierda, gente mala, porque así están instruidos ellos [el Estado]. Aquí en el Chocó fuimos perseguidos, amenazados y asesinados por la fuerza pública."
(Comisión de la Verdad, 2022, p. 69) Liderazgos indígenas

En medio de tanta violencia, represión y señalamientos por el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y las acciones feroces de las empresas que estaban explotando todos los tesoros naturales del Pacífico, las comunidades se organizaron para oponerse y resistir a estas acciones. La Comisión de la Verdad resaltó las siguientes, pero, ¡pilas!, son principalmente las organizaciones que nacieron en oposición a la explotación maderera del departamento:

- ☞ Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) en 1987.
- ☞ Organización Campesina del bajo Atrato (Ocaba) en 1989.
- ☞ Organización Campesina del San Juan y de la Costa (ACADESAN) entre 1988 y 1990.
- ☞ Asociación Campesina del Baudó (ACABA) en 1989.

13 A través de entrevistas a excombatientes realizadas por la Comisión, antes de 1996 las FARC lograron tener entre 500 y 600 combatientes en la región, lo que permitió que del Frente 5 salieran los Frentes 34 y 57.

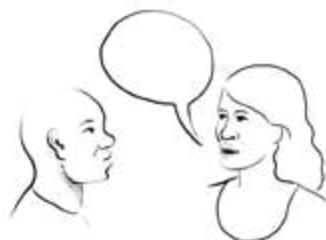
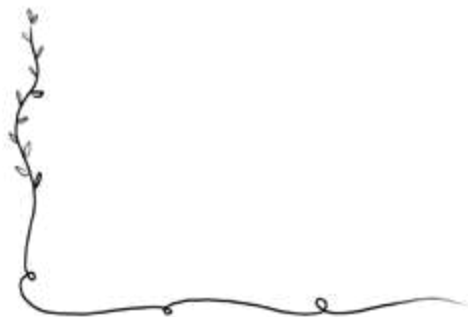
¿Cuáles cree usted que fueron
las razones y las consecuencias
de esa estigmatización?

¿Qué otras organizaciones
agregaría usted?
¿Reconoce, recuerda o hace
parte de alguna de ellas?



Comparta con los jóvenes las historias que conozca de estas organizaciones y si hace parte de alguna de ellas, hablen de esos procesos...

Como dice el refrán: recordar es vivir.



Las de ellos titilan eternamente...

La Comisión encontró que la participación de las comunidades negras e indígenas en las FARC-EP se hizo más pronunciada a través del engaño, la coerción y el reclutamiento forzado de menores de edad. Las tácticas de reclutamiento involucraban promesas de un compromiso a corto plazo, seguido de la oportunidad de elegir una ciudad para vivir, asistir a la universidad y tener una casa propia. ¿Recuerda cuáles eran esas estrategias para involucrar a los jóvenes en la guerra?

En 1993 fue el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas del Pacífico (FARIP), fundadas por Martín de Jesús Evaó. ¿Las recuerda? La Comisión encontró que aunque inicialmente estaba respaldada por las FARC-EP, FARIP operó de manera independiente, luchando por la autonomía y defendiendo los territorios indígenas de la explotación y contra el desplazamiento causado por proyectos como el Canal Interoceánico Atrato-Truandó, aprobado por el Congreso en 1987.

Según estableció la Comisión, la relación entre las FARC-EP y las comunidades étnicas se movió entre la alineación estratégica con los problemas de la comunidad y la violencia selectiva contra grupos étnicos y sus líderes. Esto llegó al punto de que las acciones de las FARC-EP incluyeron la asistencia obligatoria a sus reuniones, violencia contra aquellos con afiliaciones políticas diferentes y reclutamiento de jóvenes, a través de coerción y engaños como estrategia para engrosar sus filas y ejercer su control territorial sobre las fronteras.

La violencia de las FARC-EP se intensificó en la década de 1990 con ataques a estaciones de policía, oficinas municipales y sucursales de la Caja Agraria a lo largo de la costa del Pacífico, lo que resultó en víctimas civiles. La expansión en el número de combatientes y frentes en el Pacífico, incluida la creación del Bloque

Noroccidental y el Comando Conjunto de Occidente, contribuyó al aumento de la violencia, los asesinatos selectivos y los secuestros.

Remando contra el olvido



Francisco Rojas Birry creó junto a otros líderes de la región la Organización Regional Indígena del Chocó (Orewa), una plataforma desde la que se luchó por la definición de los derechos de los pueblos indígenas durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. A través del artículo transitorio 55, se reconoció al Pacífico como el lugar de ocupación colectiva de las comunidades negras y afrodescendientes.

En medio de la violencia que se vivía en el territorio, iniciativas como la de Francisco Rojas Birry fueron un faro de luz en medio de la oscuridad. Tras el logro en la Constitución de 1991 de definir los derechos de los pueblos indígenas, Birry realizó una ponencia, titulada “Los derechos de los grupos étnicos”, siendo la primera vez que se hablaba en forma clara tanto de los derechos de los indígenas, como de los afrocolombianos. ¿Usted conocía este dato?

Lastimosamente, las ansias de control y poder de las FARC-EP en el Pacífico aguaron la fiesta, pues el Frente 57, en 1993, tenía como objetivo controlar la frontera con Panamá y los municipios a lo largo del margen izquierdo del río Atrato. Una de sus

acciones principales fue el reclutamiento de población local que como milicianos debían aportar en tareas logísticas. Como lo mencionamos antes, y se vive en el día a día en zonas de conflicto, el reclutamiento, además de generar dolor y rupturas en las familias, también crea problemas en las comunidades, sembrando desconfianzas entre vecinos, llevando a que la cooperación y la organización sea cada vez más difícil.

Un líder de la región, en entrevista con la Comisión de la Verdad, relató cómo se vivieron esos años de dolor y desconfianza de una guerra que “se salió de las manos” y afectó a miles de personas:

La gente empezó a llevarles comentarios: “que este señor me robó, este de acá me cogió el lindero”. Se les salió de las manos tanto aconsejar, y empezaron a matar a la gente... Venían a tomar trago, mataban gente en el pueblo y luego se iban pal monte. ¡Una vida muy desastrosa! Las FARC-EP hicieron mucho daño al pueblo y mataron a varios líderes.

Fue un momento muy fuerte.
(Comisión de la Verdad, 2022, p. 101)

Y tienen el precio del diamante.

La presencia paramilitar en el norte del Chocó se evidenció a mediados de la década de los ochenta. En 1985, Fidel Castaño lideró un grupo conocido como “Los Tanela”, en Unguía, respaldado por familias como “Los Builes”, para contrarrestar la influencia del Frente 5 de las FARC-EP y ganar tierras indígenas y campesinas. Castaño adquirió tierras ilegalmente para legalizar los activos adquiridos por narcotráfico, propiciando

la intensificación de la tala de maderas, la potrerización y los cambios en la estructura ecológica de los territorios étnicos y de la región. Para legitimar estas acciones de despojo, Fidel Castaño entregó 2300 hectáreas de tierras a Monseñor Isaías Duarte Cancino en 1991¹⁴, en el contexto de su sometimiento a la justicia y en una suerte de reforma agraria, al ser estas tierras repartidas a campesinos desmovilizados del EPL para la siembra de plátano para exportación.



Los paramilitares, vinculados con ganaderos locales, como Raúl Emilio Hasbún Mendoza (alias Pedro Bonito), se centraron en combatir a la insurgencia, controlar el narcotráfico y llevar a cabo una contrarreforma agraria mediante el despojo de tierras a comunidades indígenas, negras y campesinas, así como una persecución a militantes y simpatizantes del PC y la UP.

En 1995, grupos paramilitares, comandados por Vicente Castaño, desembarcaron en Acandí y, junto con élites regionales, iniciaron una estrategia de vaciamiento de los territorios para el despojo, causando desplazamientos, homicidios selectivos, masacres y más violencia por los enfrentamientos con el Frente 57 de las FARC-EP. La llegada de La 70, una estructura paramilitar comandada por Élmer Cárdenas, perpetró una masacre en 1996 en la zona rural de Unguía, expulsando al Frente 57 de las FARC-EP y consolidando el modelo impulsado por los Builes y Fidel Castaño. Se estima un total de 800 víctimas de esas operaciones, muchas continúan desaparecidas.

14 Según la Comisión de la Verdad, el obispo de la Diócesis de Apartadó de la época, Monseñor Duarte, recibió 2300 hectáreas de tierras a través de Funpazcor. ¿Recuerda a esa fundación? La Fundación para la Paz de Córdoba de los Castaño, liderada por Sor Teresa Gómez, que despojó a cientos de familias en Córdoba, Urabá y Bajo Atrato.

Meses después, estos grupos entraron al Bajo Atrato con apoyo militar de la Brigada Décimo Séptima del Ejército y el comando de la Policía de Quibdó, perpetrando la Masacre de Las Brisas en octubre de 1996, donde asesinaron a 17 personas, marcando uno de los primeros hechos de violencia en la subregión. Dispararon a cinco personas frente a todo el pueblo, mientras les gritaban: “¡para que se den cuenta lo que les pasa a los guerrilleros!”.

También en 1995, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) ingresaron al sur departamento del Chocó con el propósito de proteger los intereses de mineros y grandes comerciantes locales. Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano, excomandante del Bloque Pacífico¹⁵ —también conocido como Frente Héroes del Chocó— declaró en los tribunales de Justicia y Paz que este bloque surgió como respuesta a la presencia guerrillera en los municipios del Medio Atrato y para salvaguardar los negocios personales de la élite local.

Para ese mismo año, según la Comisión, la explotación de platino aumentó en el municipio de Condoto, la bonanza extractiva aumentaba, al igual que la presencia guerrillera, causando que la llegada del paramilitarismo fuera inminente. La estrategia del paramilitarismo en la zona se intensificó en 1996 con la masacre del 12 de junio de ese año en el corregimiento de El Siete, perteneciente al municipio de El Carmen de Atrato. ¿Conoce qué pasó allí? Si no, le traemos una píldora para la memoria. Allí, los paramilitares iniciaron un régimen de terror basado en acusaciones a las comunidades locales de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Esta situación provocó el desplazamiento de

15 La Comisión encontró que reuniones realizadas por paramilitares como Carlos Mario García Fernández, alias Rodrigo o Doble Cero, en Quibdó, con mineros y comerciantes locales, fueron fundamentales para la consolidación del Bloque en 1995.

657 personas entre 1997 y 1998, especialmente de comunidades indígenas como Sabaleta y La Puria.

Las ACCU también entraron a Riosucio, en 1996, en coordinación con la Policía para establecer conjuntamente el control territorial en la zona. Luego de la Operación Génesis y la Operación Cacarica¹⁶ en 1997, llevadas a cabo por la fuerza pública y los paramilitares, se registraron múltiples asesinatos y desplazamientos masivos. La Comisión documentó que en este periodo, aproximadamente 12 313 personas se vieron forzadas a desplazarse del Bajo Atrato y el Darién chocoano hacia Pavarandó y Turbo, dejando un impacto significativo en la continuidad y permanencia de los pueblos en sus territorios.



Entre el 24 y 27 de febrero de 1997, se realizaron conjuntamente las operaciones militares Cacarica y Génesis en el Bajo Atrato —contra el frente 57 de las FARC-EP— por las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35 de la Brigada XVII del Ejército. Junto a paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) desplazaron, entre 1997 y 2002, a las comunidades afrodescendientes y campesinas de Riosucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte.

16 La Comisión de la Verdad resaltó que operaciones militares como Cacarica y Génesis en el Bajo Atrato respondían a la consolidación de un proyecto económico y político de control social y territorial en la región, donde se expulsaba a las comunidades originarias del territorio para acumular tierras e implementar proyectos agroindustriales de palma, banano y ganadería.

La entrada de los paramilitares al Pacífico coincidió, según halló la Comisión, con las luchas étnico-territoriales por la titulación colectiva de tierras, relacionadas con la Ley 70 de 1993. Aunque en esos años se vivieron fuertes oleadas de desplazamientos y despojos, las comunidades negras se organizaron para solicitar titulaciones colectivas y defender sus territorios. Entre 1996 y 2002, las comunidades negras del Pacífico lograron que se reconocieran sus derechos sobre más de tres millones de hectáreas.

Sin embargo, esas luchas se vieron menguadas por el accionar militar de las ACCU, que usaron la Operación Génesis como pretexto para asesinar selectivamente a líderes comunitarios, dirigentes políticos y miembros de Juntas de Acción Comunal. Uno de los casos emblemáticos que resaltó la Comisión de la Verdad es el asesinato de Marino López Mena en Bijao, río Cacarica, el 27 de febrero de 1997. ¿Lo recuerda o lo había escuchado?

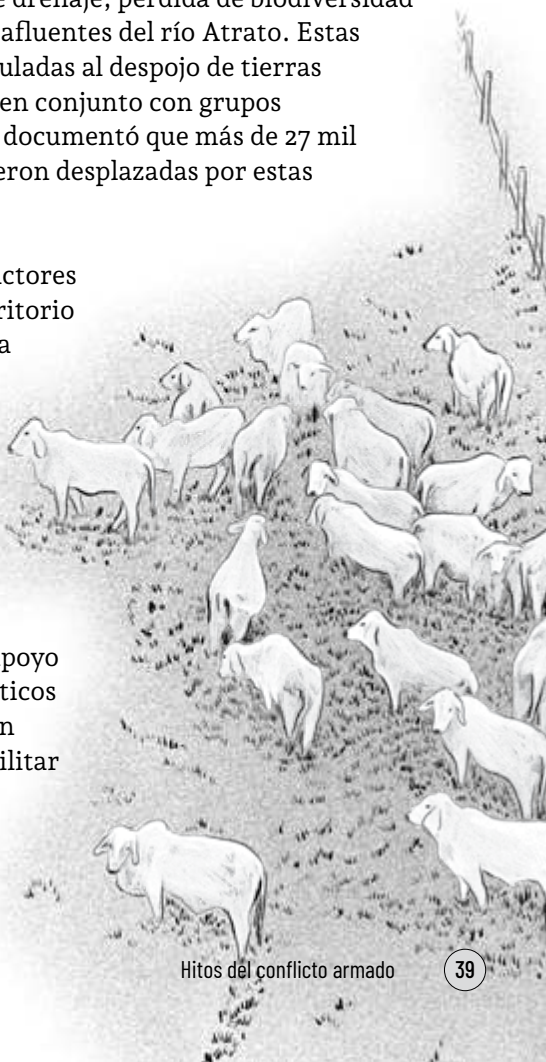
Imagínese que la colaboración entre fuerza pública y paramilitares en la operación para expulsar a las FARC-EP y para despojar los territorios del Bajo Atrato resultó en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano en 2013, por omitir su deber de protección a los ciudadanos y participar en el asesinato y desplazamiento de pobladores de la región. La Corte IDH demostró que la Décima Séptima Brigada diseñó la operación junto a los jefes paramilitares Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Fredy Rendón Herrera (El Alemán). El general (r) Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de Marino López.

Al tiempo en que todo esto ocurría, el proyecto de palma aceitera, presentado como alternativa económica, se asoció con inversionistas de la costa Atlántica, como Luis Donaciano Riascos, Javier Daza e Ítalo Cianci. Empresas como Urapalma y su filial Extractora Bajirá S.A. adquirieron tierras a precios irrisorios,

vinculándose a la problemática del desplazamiento forzado y generando disputas territoriales, por lo que algunos empresarios, como Luis Fernando Zea Medina y Héctor Duque Echeverri, fueron condenados por su participación en el megaproyecto de palma en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó.

La expansión de los cultivos de palma y la ganadería extensiva provocaron alteraciones graves en los ecosistemas, incluyendo cambios en la red natural de drenaje, pérdida de biodiversidad y erosión de la ribera de los afluentes del río Atrato. Estas actividades estuvieron vinculadas al despojo de tierras y desplazamientos masivos en conjunto con grupos paramilitares. La Comisión documentó que más de 27 mil personas del Bajo Atrato fueron desplazadas por estas acciones entre 1992 y 2005.

La estrecha relación entre actores legales e ilegales en este territorio llevó a que la Corte Suprema de Justicia condenara a varios individuos. ¿Sabía eso? Imagínese que fue por vínculos con el proyecto político del Bloque Élder Cárdenas, incluyendo la suscripción del Pacto de Singapur, donde se brindó apoyo económico y logístico a políticos del Chocó. Esta colaboración reveló la infiltración paramilitar en el ámbito político y la manipulación de procesos electorales.



Y la mía, Señor, es una estrella negra, negra como mi cara, Señor.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la implementación de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Patriota llevó a una redistribución del control territorial entre los actores armados en el Pacífico colombiano. La campaña militar para derrotar militarmente a las guerrillas —por parte de la fuerza pública— resultó en que las FARC-EP y el ELN buscaron consolidarse en áreas fronterizas y se replegaran hacia territorios económicamente estratégicos, donde la desmovilización de las AUC, impulsada por la Ley de Justicia y Paz de 2005, había generado cierto vacío.

La desmovilización tardía del Bloque Élmer Cárdenas en Chocó estuvo influenciada por conflictos internos dentro de las AUC y la participación de narcotraficantes en el proceso de desmovilización. Le contamos que también el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y el Bloque Calima se desmovilizaron, pero estos procesos revelaron vínculos con el narcotráfico, y algunos miembros posiblemente se unieron a grupos guerrilleros u otras entidades armadas asociadas al tráfico de drogas.

Aunque se realizó un proceso de desmovilización, algunos grupos persistieron y otros nuevos surgieron, continuando estrategias para el control territorial y participando en conflictos con fuerzas guerrilleras. Este período fue testigo de la consolidación de nuevas estructuras y de la aparición de disputas territoriales entre diferentes grupos armados, incluyendo a las FARC-EP, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Rastrojos.

Ciudades del Pacífico, como Quibdó, Tumaco y Buenaventura, se convirtieron en focos de intensas disputas de grupos herederos de las AUC, como Los Rastrojos, que buscaron expandirse y proyectar nuevas estrategias para controlar corredores clave en los espacios

rurales. En este contexto, la Comisión identificó la ciudad de Buenaventura como un punto clave bajo el control de sucesores del paramilitarismo por su importancia como puerto comercial.

A la vez, estas ciudades capitales se convirtieron en receptoras de las miles de personas desplazadas a causa del conflicto, siendo Quibdó una de las que más recibieron¹⁷. Más de 71 mil personas fueron desplazadas del Bajo Atrato y el Darién y una importante cantidad de ellas llegaron a Quibdó.

La Comisión identificó que los jóvenes han sido los más impactados por la violencia urbana y el reclutamiento forzado en las capitales del Pacífico. En el caso de Quibdó, el 54 % de las víctimas de homicidios —en contextos urbanos— son menores de 30 años y tienen una fuerte relación a la extensión del conflicto armado a través de bandas, ajuste de cuentas y una salida ante la inminente violencia que se vive en los territorios. “Son jóvenes matando jóvenes”, manifestó una persona religiosa de la zona entrevistada por la Comisión de la Verdad.

La nostalgia se enganchó en su anzuelo

En las áreas rurales, la desaparición se estableció como un recurso macabro empleado frecuentemente por los actores armados, destacándose en las FARC-EP. Durante los años 2009 y 2016, se documentaron 40 casos de desapariciones en la cuenca del río Naya, atribuidos en su mayoría al accionar del Frente 30 de las FARC-EP. La búsqueda desesperada de la verdad y los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos llevó a la Asociación de Mujeres

17 Buenaventura tuvo más de 36 mil desplazados entre los años 2000 y 2003; para el mismo periodo de tiempo, en López de Micay (Nariño) los desplazados fueron 7 mil personas

AINI del río Naya a embarcarse en una tarea ardua y peligrosa, enfrentando amenazas por parte de los actores armados que persisten en las regiones.

En un acto de reconocimiento de responsabilidades, realizado en julio del 2022, por parte de esa guerrilla en la cuenca del río Naya, uno de sus excomandantes expuso las causas de estas desapariciones. Reveló que, en muchos casos, jóvenes reclutados por las FARC-EP eran trasladados a otros territorios donde perecían en diversas circunstancias, enterrándolos lejos de sus lugares de origen. Además, señaló que, en otros casos, las milicias locales, conformadas por individuos originarios de las regiones, actuaban de manera autónoma y sin control de sus mandos, cometiendo abusos y victimizaciones. Frente a tales acciones, las FARC-EP imponían consejos de guerra y ejecutaban a los responsables, aunque este comportamiento de las milicias no exima a la guerrilla de su responsabilidad sobre las desapariciones y demás afectaciones a la población local.

La situación descrita por las mujeres de AINI refleja un escenario desolador, donde las consecuencias de las desapariciones van más allá de la pérdida de vidas, extendiéndose al ámbito psicológico y social. La imposibilidad de realizar los rituales funerarios y la incertidumbre sobre el destino de los seres queridos han generado duelos prolongados y desgarradores para las comunidades afectadas. La vida cotidiana se ve trastornada por la presencia constante de la ausencia, marcando una relación traumática con la muerte y la pérdida en estas poblaciones. Así lo recuerda una mujer campesina afrodescendiente:



Ver los cuerpos en el agua, no poder coger el cuerpo y hacer el velorio, tener que ver el cuerpo subir y bajar cuando sube la marea y baja, y no lo puedes tocar, se va y se regresa. Entonces, no poder hacer el duelo que es la relación con la muerte, con la vida, romper la relación de la vida y la muerte en una población. No se sabe cuál es el abismo.

(Comisión de la Verdad,
2022, p. 193)

Algunas organizaciones de víctimas han realizado esfuerzos significativos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo amenazas por parte de los actores armados que buscan mantener el control y la impunidad. La situación pone de manifiesto la complejidad de reconstruir el tejido social en áreas afectadas por décadas de conflicto armado, donde la violencia ha dejado profundas cicatrices y desafíos persistentes para la construcción de la paz y la reconciliación.

¿Cómo lo ve usted?

¿Es así? ¿Se le ocurre cómo podemos hacer para recuperar la confianza dentro de nuestras comunidades?



Para algunos liderazgos entrevistados por la Comisión de la Verdad, la violencia no se limita al exterminio físico, sino que tiene un propósito más amplio: la consolidación de una plataforma económica. ¿Qué significa eso? Según esos liderazgos del Pacífico, la violencia y los grupos armados son instrumentos para consolidar una plataforma del desarrollo, son vistos como un medio y se declaran víctimas del desarrollo y no del conflicto armado, pues para ellos, es la visión de desarrollo la que provoca todo lo que está pasando en el territorio.

Siguiendo este argumento, los verdaderos responsables de esta violencia no son solo los actores armados, sino también el Estado con su visión de desarrollo y empresarios y compañías que, en alianza con un Estado proempresarial, persiguen sus propios intereses económicos, en detrimento de las visiones de desarrollo que tienen las poblaciones étnicas, campesinas y mestizas de la región. En este contexto, las víctimas se ven afectadas por la violencia directa y por el desarrollo impulsado por intereses económicos externos, que genera impactos negativos en el tipo de desarrollo que tienen las comunidades locales.



¿Cómo se ve eso?

Con desplazamientos masivos de sus tierras para realizar megaproyectos y construcciones.

¿Qué opina usted, querido lector y lectora? Con todo lo que hemos revisado de la historia y lo vivido, ¿también podría hablar de víctimas del desarrollo?



La Comisión de la Verdad también halló que el pueblo indígena Wounaan, que se ubica en la región Pacífico, ha sido embestido, una y otra vez, por la guerra. Casi el 8 % del total de su población ha tenido que dejar sus territorios ancestrales para salvar sus vidas, como ha sido el caso de las comunidades de Unión Chocó, San Cristóbal, Puerto Olave, Unión Wounaan y Macedonia.

A pesar de este sombrío panorama, se resalta la resistencia de la gente del Pacífico que sigue luchando contra las secuelas del conflicto. La Comisión destacó iniciativas como “Vení, jugá”, “Black Boys” y “Ajuventu”, que buscan apoyar a los jóvenes mediante programas culturales y deportivos. Estos esfuerzos han tenido éxito en sacar a jóvenes de la delincuencia, transformándolos en individuos emprendedores y empoderados, lo que sugiere una esperanza y resiliencia en medio de las adversidades. ¿Conoce alguna de estas iniciativas?

¿Qué otras iniciativas hace falta mencionar acá?

La reconciliación se logra generando espacios comunitarios. Porque uno puede ir a hablar de reconciliación, pero no es lo mismo si usted genera espacios para que las mujeres se encuentren, para que los jóvenes se encuentren desde el deporte y el arte. Así se va entretejiendo la reconciliación, porque lo que ha hecho la violencia es separarnos y ha atacado la cultura, porque saben que la cultura es un punto de encuentro. (Comisión de la Verdad, 2022, p. 198)

Las iniciativas para poner fin a la persistencia del conflicto en la región señalan la responsabilidad primordial del Estado en esta tarea. La implementación completa del Acuerdo Final de Paz, aún pendiente en varios de sus aspectos —según la percepción de la población—, se destaca como una demanda crucial. La creación de mecanismos que reduzcan la brecha de desigualdad y pobreza, factores que alimentan la llama de la guerra, según numerosos testimonios, es uno de los pasos que se esperan, al igual que la creación de políticas públicas centradas en el desarrollo humano y sostenible, especialmente dirigidas a la juventud, con el objetivo de brindarles opciones reales para salir adelante.

A pesar de los desafíos, los pueblos indígenas, negros y campesinos de la región mantienen la creencia en la posibilidad de un cambio significativo. La Comisión reconoce que, aunque los habitantes del Pacífico no tengan todas las respuestas para poner fin a la violencia, son quienes más continúan apostándole al fin de la guerra. ¿Es usted uno de ellos?



Los anhelos de paz y la persistencia de la violencia

El modelo territorial del Estado colombiano, centrado históricamente en la región andina, ha relegado al Pacífico a ser una zona de colonización y explotación de recursos. Las élites económicas andinas han explotado los recursos naturales en búsqueda de riqueza, beneficiándose a expensas de las comunidades locales. El saqueo y el despojo han sido constantes en la historia del Pacífico, exacerbados por el conflicto armado interno. Grupos armados, desde guerrillas hasta paramilitares, han seguido una lógica similar, buscando financiamiento y consolidando economías vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Proyectos legales como la palma aceitera y la industria bananera se han desarrollado imponiendo violencia y desplazamiento.

Sin embargo, en medio de este panorama no muy alentador, la Comisión de la Verdad resalta que leyes, como la Ley 1448 de 2011 o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, han permitido que los pueblos étnicos puedan emprender una ruta para recuperar aquellos territorios arrebatados. Hasta el 2022, el 25 % del área total de la región Pacífico estaba en trámite de reclamación para restitución de tierras, es decir, más de dos millones de hectáreas. Estas y otras acciones cotidianas de las comunidades negras y los pueblos indígenas del Pacífico dan cuenta de esas resistencias a la violencia del conflicto armado, al igual que al racismo que, lastimosamente, sigue enraizado en muchos comportamientos de los y las colombianas y sus instituciones.

En su informe, la Comisión de la Verdad invita a que se realice un proceso de diálogo regional que involucre a todos los actores

que habitan y tienen impacto en el territorio. Este diálogo debe reconocer las complejas interrelaciones entre el desarrollo económico y social, las formas de uso y ocupación del territorio y las trayectorias culturales y político-institucionales que han estado en la base de los conflictos territoriales de la región.

Estas y más acciones deberían ir encaminadas, según la Comisión, a la estructuración de un ordenamiento territorial que aporte a la reconstrucción del tejido económico y social de la región, como medida necesaria para subsanar parte de esas raíces del problema que han generado desigualdad y violencia. ¿Y eso cómo se come? La Comisión señala que se deben fomentar la movilidad de capacidades locales y contar con el apoyo del gobierno nacional para fortalecer esas capacidades de autodesarrollo. La articulación institucional, regional y territorial permitirá que se tomen decisiones de política pública para atender las necesidades de las personas.

¿Qué otras acciones agregaría usted?

Desde el Cinep/PPP, creemos que, para cambiar el rumbo de este país, se necesita el compromiso de todas y todos, así como el fortalecimiento de los procesos organizativos para la exigibilidad a las instituciones para el cumplimiento de sus funciones y la garantía de los derechos. Por eso, queremos hacerle una invitación a sumarse, a nivel personal y colectivo, a esos procesos, si aún no lo ha hecho. Si usted ya es parte de alguna organización, le invitamos a pensar cuáles son esas acciones que se pueden desarrollar en su región para sumarse a otros procesos y exigir al Estado.





Le invitamos a seguir con la lectura de la siguiente cartilla para que conozca lo que la Comisión de la Verdad nos cuenta sobre las violencias que han sufrido las mujeres y la población LGBTQ+ en el marco del conflicto armado.

Esta cartilla (y las otras cinco que componen esta colección) se editó en el mes de febrero del año dos mil veinticinco en Bogotá, D.C., casi ocho años después de la fundación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Los textos fueron compuestos con las tipografías Andada Pro y Barlow.

Colección de cartillas
pedagógicas sobre
el Informe Final de la
Comisión de la Verdad

